



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B  
FCB 5841/2020/9/CA3

Córdoba, 19 de septiembre de 2022.

### Y VISTOS:

Estos autos caratulados **"LEGAJO DE APELACION EN AUTOS ROCCA GERMAN Y OTROS S/ DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA"** (FCB 5841/2020/9), venidos a conocimiento de esta Sala B a fin de resolver los recursos de apelación interpuestos por el Sr. Fiscal Federal N°1 de Córdoba; por el Dr. Facundo Amoedo- en representación de Mauro Ezequiel Falvo- y por el Dr. Héctor Osvaldo Baccino -en representación de German Rocca, Marcos Baldovino, Joaquín Rocca y Rosa Marta Micoli-, en contra de la resolución del Juzgado Federal N°1 de Córdoba de fecha 04.02.2022 en cuanto dispuso: **"RESUELVO: I) ORDENAR** el procesamiento **-CON PRISIÓN PREVENTIVA-** de Marcos BALDOVINO, filiado supra, por considerarlo *"prima facie"* como supuesto autor responsable (art. 45 CP) del delito de Asociación Ilícita Fiscal contemplado en el art. 15 inc. "c" del Régimen Penal Tributario (ex Ley 24.769), hoy prevista en el art. 279 de la Ley 27.430, en carácter de organizador (HECHO PRIMERO), y del delito de Lavado de Activos agravado por la utilización de una persona de existencia ideal (art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado "a" y art. 304 del Código Penal) (HECHO TERCERO) (arts. 306, 310, 312 y 319 del Código Procesal Penal de la Nación), todo de conformidad a lo analizado en el considerando V, VII, y VIII. **II) ORDENAR** el procesamiento sin prisión preventiva de **Germán ROCCA**, filiado supra, por considerarlo *"prima facie"* como supuesto autor responsable (art. 45 CP) del delito de Asociación Ilícita Fiscal contemplado en el art. 15 inc. "c" del Régimen Penal Tributario (ex Ley 24.769), hoy prevista en el art. 279 de la Ley 27.430, en carácter de organizador

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982

(HECHO PRIMERO), y del delito de Lavado de Activos (art. 303 del Código Penal) (HECHO CUARTO) (arts. 306 y 310 del Código Procesal Penal de la Nación), todo de conformidad a lo analizado en el considerando V, VII, y VIII. **III) ORDENAR** el procesamiento sin prisión preventiva de **Joaquín ROCCA, Rosa Marta MICOLI, y Mauro Ezequiel FALVO**, filiados supra, por considerarlos "*prima facie*" como supuestos autores responsables (art. 45 CP) del delito de Asociación Ilícita Fiscal contemplado en el art. 15 inc. "c" del Régimen Penal Tributario (ex Ley 24.769), hoy prevista en el art. 279 de la Ley 27.430, el primero (Joaquín ROCCA) asimismo en carácter de organizador (HECHO PRIMERO) (arts. 306 y 310 del Código Procesal Penal de la Nación), todo de conformidad a lo analizado en el considerando V y VIII. ... **VI) ORDENAR** el sobreseimiento de **Joaquín ROCCA y Rosa Marta MICOLI**, filiados supra, por el delito de Lavado de Activos (art. 303 del Código Penal) (HECHO QUINTO), por el cual fueran indagados, dejando expresa constancia que la formación del presente sumario no afecta el buen nombre y honor del que gozaren (art. 334 y 336 in fine del CPPN), todo de conformidad a lo analizado en el considerando VII. ...".

#### **Y CONSIDERANDO:**

**I.** Para así resolver, el a quo sostuvo que de la prueba incorporada en autos se desprende que Germán Rocca, Joaquín Rocca y Marcos Baldovino, desde el año 2016, habrían dispuesto la apertura de locales comerciales en distintos puntos de la ciudad de Córdoba (franquicias de las heladerías Cremolatti y Creambury) como modo de su actividad comercial y los habrían habilitado a nombre de terceras personas físicas y jurídicas que no tendrían la capacidad económica, patrimonial, ni financiera para ~~desarrollar dicha actividad, ocultando así la verdadera~~

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B  
FCB 5841/2020/9/CA3

dimensión de su actividad comercial y la cantidad de empleados que tenían contratados, todo con el fin de obtener una mayor rentabilidad económica.

Sostuvo que los nombrados habrían dispuesto la creación de determinadas empresas para posibilitar la realización de las maniobras investigadas. Asimismo, los nombrados habrían dispuesto que la deuda impositiva o previsional de esas firmas no se pagase o se hiciera parcialmente, dejando luego inactivas las firmas involucradas para crear nuevas empresas bajo el mismo rubro y con los mismos empleados y continuar así con su actividad.

Asimismo señaló que las empresas investigadas eran administradas por el grupo económico oculto (Germán Rocca, Joaquín Rocca y Marcos Baldovino), quienes eran los verdaderos beneficiarios de las ganancias producidas, no habrían declarado ingresos ni empleados, y los empleados que sí eran declarados, habrían sido incluidos en la nómina salarial por remuneraciones menores a las que realmente percibían.

Afirmó el magistrado que todas las empresas investigadas, tanto las que se encuentran activas como la las que están inactivas, tienen en común al mismo asesor (Estudio Bonetti & Falvo) lo que a su criterio, permite aseverar que Mauro Ezequiel Falvo, en su carácter de contador de las firmas Eletea 1086 SA, Mopa 1086 SA, Wadiya SAS y Dunk SA; y representante ante la AFIP de Amsa SA, Suertudo SA, Noplag SAS, Gómez María Luz, Rossi Oscar Emmanuel, Scurta Eric Alejandro, Rocca Germán, Sosa Franco Sebastián, Andalao SA, habría asesorado a los imputados Rocca-Baldovino a los fines de llevar a cabo las maniobras investigadas y coordinado las actuaciones y presentaciones

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982

fiscales de las distintas personas físicas y jurídicas involucradas.

En relación a la participación de Rosa Marta Micoli (madre del imputado Germán Rocca), el a quo señala que habría sido integrante del grupo económico investigado en función de su participación como Directora en la empresa AMSA SA.

En base a lo dicho, el juez instructor dispuso el procesamiento de Germán Rocca, Joaquín Rocca, Marcos Baldovino, Rosa Marta Micoli y Mauro Ezequiel Falvo por el delito de asociación ilícita fiscal (art. 15 c ley 24.769 y 27.430), los tres primeros en carácter de organizadores.

Por otra parte, en relación al delito de lavado de activos, sostuvo que la prueba incorporada permite sostener que Baldovino habría introducido al circuito económico legal parte de los activos provenientes de las maniobras ilícitas referidas supra, con la finalidad de darles una apariencia de origen lícito. Señaló que la principal operación de lavado habría consistido en la compraventa de bienes muebles que habría adquirido y/o transferido ocultando su participación mediante la interposición de una sociedad por acciones simplificada (Colectivo 60 SAS). Afirmó que a través de la reiteración de estos hechos, habría puesto en circulación dándole apariencia legal una suma no determinada con exactitud pero que supera el monto de \$1.265.000, a través de la adquisición de una camioneta Amarok 2.0 -el 24.04.2019-, dominio AB223YE, inscripta a nombre de la sociedad Colectivo 60 SAS (constituida únicamente por Baldovino).

Indicó el magistrado que Colectivo 60 SAS se encuentra inscripta en AFIP desde enero de 2019; no habría desarrollado actividad comercial desde su inscripción; ~~presenta sólo declaraciones de IVA en "0"; no se encuentra~~

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B  
FCB 5841/2020/9/CA3

inscripta como empleador; los costos operativos son irrelevantes; no registra ingresos por ventas con tarjeta de crédito ni facturas electrónicas. Con ello concluye que la firma no habría percibido ingresos para solventar la compra de la camioneta Amarok 2.0, dominio AB223YE, y que su creación habría sido a los fines de desviar fondos que componen el grupo económico investigado (Rocca-Baldovino) o para desapoderar de bienes a esas empresas y evitar así eventuales embargos por falta de pago de impuestos o por eventuales juicios por las relaciones laborales ocultas o simuladas.

Respecto de Germán Rocca, el a quo sostuvo que se ha logrado acreditar que el nombrado habría introducido al circuito económico legal parte de los activos provenientes de las maniobras ilícitas investigadas, con la finalidad de darles una apariencia de origen lícito. La principal maniobra de lavado de activos, señala el a quo, habría consistido en la compraventa de bienes muebles que habría adquirido y/o transferido. Agrega que a través de la reiteración de esos hechos habría puesto en circulación, dándole una apariencia legal, una suma no determinada con exactitud pero que supera el monto de \$1.483.207, a través de la compra de una motocicleta Ducati Supersport S, dominio A113VGE, inscripta a su nombre el 21.02.2020. Señaló, además, el magistrado que la motocicleta dominio A002ENU (referida por el Fiscal en la ampliación del requerimiento de instrucción), no integra la maniobra de lavado pues ingresó al patrimonio del imputado Rocca el 16.07.2016, es decir, un año y medio antes del delito de evasión que se le atribuye y, asimismo, toda vez que el delito de asociación ilícita fiscal que se le imputa no requiere la producción de un beneficio económico.

---

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982

Finalmente, respecto del delito de lavado de activos que se les atribuye a los imputados Joaquín Rocca y Rosa Marta Micoli, el suscripto entendió que el vehículo Volkswagen Passat, dominio AB392RN, ingresó al patrimonio de los nombrados el 13.06.2017, es decir, al menos seis meses antes del delito de evasión que se les atribuye. Por ello, concluyó que dicho bien no habría sido adquirido con activos provenientes de las maniobras ilícitas investigada.

Con respecto a la prisión preventiva dictada en contra de Marcos Baldovino, el juez, luego de efectuar una reseña de los hechos, sostuvo que voluntaria e intencionalmente brindó una dirección falsa que ocasionó un entorpecimiento de la investigación, lo cual resulta determinante para afirmar que Baldovino no cumplirá con las obligaciones procesales que se le impongan y equivale al peligro procesal de obstrucción de la investigación que preestablece el art. 319 del CPPN.

**II.** Ante este pronunciamiento interpuso recurso de apelación el Sr. Fiscal Federal N°1, agraviándose por el sobreseimiento dispuesto en favor de Joaquín Rocca y Rosa Micoli por el delito de lavado de activos (hecho quinto) y alegando que no existe certeza negativa que permita dictar el sobreseimiento por el hecho que se le atribuye. Sostiene además, respecto del delito de lavado de activos, que una simple observación de la fecha de constitución de las sociedades investigadas permite sostener que los hechos ilícitos se originan por lo menos desde el año 2016 (fs. 22/vta).

**III.** Por otra parte, también apeló el ~~procesamiento de Mauro Ezequiel Falvo,~~ su defensor

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B  
FCB 5841/2020/9/CA3

particular, Dr. Facundo Amoedo (fs. 24/vta.) Se agravio por entender que el auto recurrido fundamenta deficientemente la participación de su defendido en el hecho que se le atribuye (miembro de la asociación ilícita fiscal), por el sólo hecho de figurar en los registros de AFIP como contador de algunas de las empresas o las personas humanas que se encuentran imputadas, sin ningún otro fundamento.

Además señala que la resolución impugnada presenta una orfandad probatoria en cuanto a la acreditación de los extremos subjetivo y objetivo de la imputación delictiva en contra de Falvo, a más de que no ha podido ser valorada la ampliación de indagatoria presentada con posterioridad al procesamiento.

Por último, alega una carencia de fundamentación respecto de la calificación legal del hecho primero como asociación ilícita tributaria y entiende que tanto la descripción de los hechos como la fundamentación dada en el auto apelado, son contradictorias con la pretensión de autonomía de esa figura penal, y con la falta de mérito ordenada respecto del delito de evasión de recursos de la seguridad social.

**IV.** Finalmente, a fs. 25/6 vta., interpone recurso de apelación el Dr. Héctor Osvaldo Baccino, en contra del procesamiento de sus defendidos Germán Rocca, Marcos Baldovino, Joaquín Rocca y Rosa Micoli. Se agravia, en primer lugar, por entender que no hay elementos objetivos ni subjetivos que permitan calificar los hechos descriptos en la acusación como constitutivos del delito de asociación ilícita fiscal. Además entiende contradictorio que se haya dispuesto la falta de mérito por el delito de evasión de los recursos de la seguridad social y por otro lado se haya dispuesto procesar por el delito de asociación

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982

ilícita fiscal, cuando aquel es el único delito de naturaleza tributaria que se les endilga.

En segundo lugar, se agravia específicamente por la participación de Joaquín Rocca y Micolí en esos hechos, siendo que, a su criterio, la prueba no demuestra su participación y la misma fue sostenida por el sólo hecho de tener participación accionaria en una de las sociedades o por resultar familiares directos de uno de los sindicatos como dueño de las explotaciones comerciales.

En tercer lugar se agravia por la falta de valoración de diferentes elementos probatorios que permitirían arribar a conclusiones opuestas a las sostenidas en el auto apelado.

Como cuarto agravio, en relación a los hechos cuarto y quinto, atribuidos a Baldovino y German Roca y calificados como lavado de activos, sostiene que tal como han sido descriptos, son atípicos.

Finalmente se agravia por el dictado de la prisión preventiva en contra de Baldovino, señalando la falta de fundamentación, errónea valoración de los criterios para considerar la peligrosidad procesal y la errónea valoración de la prueba.

**V.** Radicados los autos ante esta Alzada, los apelantes presentaron los informes previstos en el art. 454 del CPPN, a los que cabe remitirse en aras de la brevedad (fs. 32/5vta., 36/61 vta., 62/68).

**VI.** Sentadas así y reseñadas precedentemente las posturas asumidas por las partes, corresponde introducirse propiamente en el tratamiento de los recursos interpuestos, de acuerdo al orden de votación que surge del certificado obrante a fs. 72. En virtud de lo dispuesto por el art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, la presente







## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B  
FCB 5841/2020/9/CA3

resolución es emitida sólo por los Jueces de Cámara que la suscriben.

**El señor Juez de Cámara doctor Abel G. Sánchez Torres dijo:**

Llegan los autos a estudio del suscripto a los fines de resolver los recursos de apelación interpuestos por el Sr. Fiscal Federal N°1 y por los doctores Facundo Amoedo y Osvaldo Baccino en contra de la resolución dictada por el Juzgado Federal N°1 con fecha 04.02.2022.

I. Para comenzar, entraré a tratar el recurso interpuesto por el Sr. Fiscal Federal N°1 en contra del **sobreseimiento dispuesto en favor de Joaquín Rocca y Rosa Marta Micoli** por el delito de lavado de activos que se les atribuye.

El fundamento dado por el a quo para sobreseerlos fue que el vehículo Passat, dominio AB392RN, fue adquirido por lo menos seis meses antes del delito de evasión incluido en el requerimiento de instrucción de fs. 367/370, por lo que no puede sostenerse, a su criterio, que dicho bien haya sido adquirido con fondos provenientes de las maniobras ilícitas investigadas.

Sin embargo, advierto, en primer término, que el hecho de evasión de recursos de la seguridad social (hecho segundo del pronunciamiento apelado), el cual se le imputa a Joaquín Rocca, Marcos Baldovino y a Germán Rocca, ha sido resuelto por el a quo, dictando la falta de mérito de los imputados *"en atención a que parte de ese monto fue formulado como deuda presunta, y asimismo siendo que el Tribunal se encuentra a la espera de que la AFIP remita el Informe Final de Inspección conforme fuera ordenado en el proveído obrante a fs. 831..."*.

Por otra parte, el proveído de fs. 831 ordena oficiar a AFIP a fin de que inicie el proceso de ~~verificación y determinación de deuda~~ en relación a IVA,

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982

Ganancias y Aportes y Contribuciones al régimen de la seguridad social (art. 18 ley 27.430) en relación a Joaquín Rocca y Rosa Micoli -entre otros- *"por el período comprendido entre el año 2016 hasta la actualidad"*.

Lo dicho permite observar, por una parte, que aún resta la producción de prueba respecto del delito de evasión de recursos de la seguridad social y, por otra parte, que ambos imputados se encuentran procesados por el delito de asociación ilícita fiscal, el cual si bien no requiere para su configuración la obtención de un beneficio económico, tampoco permite descartar de forma definitiva que los fondos con los que se adquirió el automóvil referido hayan provenido de algún ilícito cometido por estos imputados.

Así, la ampliación del requerimiento de instrucción obrante a fs. 800/1, fijó el hecho imputado de la siguiente manera: ***"En el marco de las actividades descriptas en los hechos nominados como primero y segundo del requerimiento de instrucción de fecha 1 de julio de 2021, Joaquín Rocca y Rosa Marta Micoli habrían introducido al circuito económico legal parte de los activos provenientes de las maniobras delictivas mencionadas supra con la finalidad de darles la apariencia de un origen lícito. Así las cosas, la principal operación de lavado referida, habría consistido en la compra/venta de bienes muebles que habría adquirido y/o transferido. A través de la reiteración de estos hechos, diversos pero vinculados entre sí, habría puesto en circulación dándole apariencia legal, a un monto de dinero aún no determinado con exactitud, pero que como mínimo, supera la suma de 930.000 pesos, a través de la adquisición de un vehículo VW Passat 2.0 TSI DSG modelo 2017 dominio AB392RN el cual***

---

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B  
FCB 5841/2020/9/CA3

**fue inscripto a nombre de ambos con fecha 13 de junio de 2017."** (el resaltado es propio).

Ello pone de resalto que tanto el delito de asociación ilícita fiscal (hecho primero del requerimiento de instrucción de fs. 367/70), como el delito de evasión de recursos de la seguridad social (hecho segundo del requerimiento referido) han sido señalados en la pieza requisitoria como los delitos precedentes del hecho de lavado de activos que se les imputa a Micolí y a Joaquín Rocca.

Así las cosas, y siendo asimismo que ambos fueron procesados por el a quo por el hecho nominado primero (asociación ilícita fiscal), entiendo que no puede descartarse de forma definitiva su participación en el delito de lavado de activos que se les atribuye y, por ende, resulta prematuro el dictado de su sobreseimiento.

Ello así, toda vez que, reitero, no existe certeza negativa en autos en cuanto a la falta de participación de Joaquín Rocca y Micolí en el delito que se les imputa. Debo recordar que, tal como he sostenido en anteriores pronunciamientos, **el sobreseimiento requiere la existencia de un estado de certeza negativa** que permita el cierre definitivo de la causa respecto de los imputados por el hecho que se le atribuye.

Es sabido que el grado de convicción del juzgador se puede manifestar en las siguientes direcciones: caso en el que hubiese adquirido certeza negativa, corresponde el dictado del sobreseimiento del imputado, cuando resulta claro que la pretensión represiva se ha extinguido o carece de sustento (art. 336 del C.P.P.N., que contempla las situaciones de que el hecho no encuadra en una figura penal, o que media alguna causa de justificación, ~~inculpabilidad, inimputabilidad, o excusa absolutoria~~);

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982

caso en el que el juez hubiese alcanzado el grado de probabilidad, tras lo cual se ha de ordenar el procesamiento del acusado, cuando hubiera elementos de convicción suficientes para estimar la concurrencia de un hecho delictivo y la presunta culpabilidad de aquél como partícipe del mismo (art. 306 del C.P.P.N.) y, por último, el caso en el que se hallase en estado de duda, al no haber mérito para ordenar el procesamiento ni tampoco para sobreseer, tras lo cual se ha de dictar un auto que así lo declare (art. 309 del C.P.P.N.).

Por ello, no existiendo certeza negativa respecto de la participación de Joaquín Rocca y Micoli en el hecho quinto que se les atribuye (lavado de activos), corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por el Fiscal Federal N° 1 y revocar el auto apelado en cuanto así lo dispuso, debiendo continuarse la investigación a su respecto.

**II.** En segundo lugar, corresponde tratar el **recurso interpuesto por el Dr. Facundo Amoedo en su carácter de defensor de Mauro Ezequiel Falvo**. El letrado alega, entre otras cuestiones, la deficiente fundamentación del auto apelado y la falta de acreditación de los extremos requeridos por la figura imputada.

Conforme establece el art. 123 del CPPN *"Las sentencias y autos deberán ser motivados, bajo pena de nulidad. Los decretos deberán serlo, bajo la misma sanción, cuando la ley lo disponga"*. En este sentido, la regla general en materia de nulidades en el procedimiento penal resulta de lo estipulado por el art. 166 del CPPN, en cuando dispone: *"Los actos procesales serán nulos sólo cuando no se hubiera observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo pena de nulidad"*.

Esta sanción procesal implica una grave decisión ~~toda vez que elimina un acto del proceso por estar viciado~~

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B  
FCB 5841/2020/9/CA3

de una irregularidad manifiesta e insalvable, razón por la cual, el Código Procesal Penal de la Nación impone un criterio restrictivo de interpretación al respecto.

En esta tesitura, las nulidades absolutas quedan reservadas exclusivamente a la violación de normas constitucionales, o cuando la ley así lo establezca expresamente, como resulta ser el caso de la exigencia de motivación del art. 123 del CPPN.

Tal como lo ha señalado la doctrina, *"motivar una sentencia significa la obligación de consignar las causas que determinan el decisorio o exponer los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan la resolución, esto es, las razones que poseen aptitud para legitimar el dispositivo; se trata de una comprobación lógica para controlar a la luz de la razón la bondad de una decisión surgida del sentimiento - lo cual parece excesivo, pues linda más con la íntima convicción requerible al jurado que con la libre convicción impuesta al tribunal (arts. 241, 263, inc. 4° y 398)-; sin embargo, es acertado decir que consiste en racionalizar el sentido de justicia".* (Francisco J. D'Albora; Código Procesal Penal de la Nación, Anotado, Comentado, Concordado, Editorial Abeledo-Perrot, Octava Edición, Buenos Aires, 2009).

Al respecto es dable señalar que la exigencia de fundamentación de las decisiones jurisdiccionales, tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y del debido proceso. Por el contrario, la insuficiente o deficiente fundamentación, vulnera el derecho de defensa, ya que nadie puede defenderse de aquello que no conoce, ni cuestionar lo decidido -mediante la articulación de un recurso- sin una explicitación suficiente y clara según las razones que avalen la decisión jurisdiccional. Dicha exigencia también ~~deriva de la necesidad tanto de poner límites al libre~~

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982

convencimiento de los jueces sometiendo sus juicios a la lógica, como de posibilitar el control de sus decisiones, lo que significa demostrar que lo resuelto constituye derivación razonada del derecho vigente y no producto de la mera voluntad del Juez. De esta forma, no alcanza para satisfacer la exigencia de motivación o fundamentación del auto de mérito la mera explicitación de los elementos de prueba, sino que los mismos deben ser analizados singularmente y a la luz de la imputación delictiva que pesa sobre los encartados. Ello, en armonía con los principios que rigen la sana crítica racional y el proceso penal.

En este sentido, y con respecto a la forma de valoración de la prueba, el juzgador tiene la obligación de exteriorizar el razonamiento probatorio empleado, plasmándolo en el texto de la sentencia como única forma de controlar su racionalidad y coherencia y debe tener en consideración elementos de prueba específicos que le permitan sustentar las decisiones a las que arriba, dejando de lado convicciones personales o suposiciones que no se apoyen en prueba fidedigna.

Así entonces, se concluye que la motivación es un elemento esencial para arribar a un pronunciamiento válido y las decisiones que se adopten deben estar precedidas de un análisis de hecho y de derecho que conduzca indefectiblemente a tales conclusiones, sin desviaciones lógicas, ni razonamientos arbitrarios. Además, el razonamiento que realiza el juez para arribar a determinada decisión, no puede ser objeto de deducción por parte del lector, sino que debe estar plasmado de forma clara y precisa en la propia resolución, de modo tal que pueda corroborarse que dicha decisión se adecua y deriva de la ~~valoración realizada por el juzgador. Si en cambio, la~~

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B  
FCB 5841/2020/9/CA3

decisión no encuentra sustento en el análisis efectuado por el Magistrado o se aparta de la línea de razonamiento que expone, dicha decisión se encuentra inmotivada y como tal será arbitraria. De tal modo, todo resolutorio debe ser una consecuencia lógica del razonamiento plasmado en sus considerandos, debiendo constituir una derivación racional de la prueba valorada a la luz de los textos normativos aplicables. Para que el pronunciamiento emitido sea válido, debe contener un completo y fundado análisis de las constancias de autos, relacionando con pertinencia la constatación de los hechos y de la participación de los imputados, de modo de establecer así sus eventuales responsabilidades penales. En el razonamiento lógico que realice el juzgador no deben advertirse contradicciones, ni saltos lógicos, debiendo sustentar los juicios emitidos en elementos de cargo independientes, ponderados como dirimientes para los distintos casos. La motivación, reitero, se presenta como un requisito esencial para otorgar validez a una resolución, la cual, en caso de no satisfacer adecuadamente el deber de fundamentación, será arbitraria y por lo tanto nula.

Dicho ello, entiendo que el resolutorio puesto en crisis adolece de una adecuada fundamentación en cuanto a la participación de Falvo en los hechos que se le atribuyen.

Así, el quo, para fundamentar el dictado del procesamiento respecto a este imputado por el delito de asociación ilícita fiscal, sostuvo: *"Resulta oportuno señalar que todas las empresas investigadas, tanto las que se encuentran activas como las que están inactivas, tienen en común conforme lo informara oportunamente la AFIP en virtud de la consulta PUC, al mismo asesor: "Estudio Bonetti & Falvo". Lo expuesto permite aseverar, con el*

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982

grado de probabilidad requerido para esta etapa judicial, que **Mauro Ezequiel FALVO**, en su carácter de contador de las firmas: ELETEA1086 SA; MOPA 1086 SA; WADIYA SAS y DUNK SA; y representante ante la AFIP de: AMSA SA, SUERTUDO SA, GOMEZ MARIA LUZ, NOPLAG SAS, ROSSI OSCAR EMMANUEL, SCURTA ERIC ALEJANDRO, ROCCA GERMAN, SOSA FRANCO SEBASTIAN, ANDALAO SA, habría asesorado a los imputados ROCCA - BALDOVINO a los fines de llevar cabo las maniobras mencionadas supra, y luego habría coordinado la actuaciones y presentaciones fiscales de las distintas personas físicas y jurídicas involucradas (ver fs. 361/362vta)."

De su simple lectura se advierte que el a quo no efectuó un análisis y una relación de la prueba con el hecho atribuido a Falvo, sino que se limitó a señalar que las empresas investigadas tenían al mismo asesor contable y concluyó que, por ende, Falvo en su carácter de contador, habría asesorado a los imputados para llevar a cabo las maniobras investigadas y habría coordinado las actuaciones y presentaciones fiscales de los imputados.

La conclusión a la que arribó el magistrado no fue fundamentada en la prueba de la causa sino que se trató de una interpretación personal sin sustento probatorio alguno. El a quo se limitó a enumerar las empresas y personas que eran asesoradas por Falvo, sin explicar debidamente cómo el imputado formaba parte de la asociación ilícita fiscal de la que se le atribuye ser parte.

Por ello, estimo que la resolución apelada, en cuanto al dictado del procesamiento de Mauro Ezequiel Falvo, no constituye una derivación razonada de las circunstancias comprobadas en la causa que permita sostener la conclusión a la que se arribó, por lo que satisface de manera sólo aparente el art. 123 del CPPN, apareciendo

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B  
FCB 5841/2020/9/CA3

arbitraria y afectando así garantías de defensa en juicio y debido proceso legal. En consecuencia, no constituye un pronunciamiento jurisdiccional válido, y entiendo que corresponde declarar su nulidad (conf. art. 123 del CPPN).

**III.** Corresponde tratar ahora el recurso interpuesto por el Dr. Baccino, quien se agravia por el **procesamiento dispuesto en contra de Germán Rocca, Joaquín Rocca, Marcos Baldovino y Rosa Marta Micoli por el hecho primero, calificado como asociación ilícita fiscal.** Señala el letrado que no hay elementos en la causa que permitan sostener esa calificación legal y además, que la prueba no demuestra la participación de Joaquín Rocca y Micoli en esos hechos.

El apelante sostiene la atipicidad de los hechos, argumentando que de los informes remitidos por AFIP surge que el organismo realizó distintas inspecciones en los locales de los imputados desde el año 2016, pero ninguna culminó con denuncia penal tributaria, sino que se trató tan sólo de infracciones administrativas que llevaron a realizar ajustes y clausuras. Asimismo argumenta que de la deuda reclamada por AFIP, el 93% corresponde a deuda presunta y además señala que por el delito de evasión de recursos de la seguridad social se dispuso la falta de mérito por no contar con prueba para ordenar el procesamiento.

Más allá de lo sostenido por la defensa, entiendo que la prueba obrante en autos permite acreditar, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa del proceso, la participación responsable de Germán y Joaquín Rocca, Baldovino y Micoli en el hecho primero.

Cabe señalar que la conducta atribuida a los nombrados fue encuadrada en la figura penal de **asociación**  
**ilícita fiscal**, conforme art. 15 inc. c) de las leyes

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982

24.769 y 27.430, respecto de los tres primeros en carácter de organizadores.

Esa norma, conforme la ley 24.769, establece: *"el que a sabiendas: c) Formare parte de una organización o asociación compuesta por tres o más personas que habitualmente esté destinada a cometer, colaborar o coadyuvar cualquiera de los ilícitos tipificados en esta ley, será reprimido con prisión de tres (3) años y seis (6) meses a diez (10) años. Si resultare ser jefe u organizador, la pena mínima se elevará a cinco (5) años de prisión"*.

Esta figura penal, en el régimen penal tributario previsto por la ley 27.430 y su actual redacción, no difiere sustancialmente de la prevista por la Ley 24.769, (en el mismo sentido: "Delitos Tributarios y contra la seguridad social", Borinsky - Turano - Rodríguez - Schurjin Almenar, 1ª ed. Revisada, Santa Fe, Ed. Rubinzal Culzoni, 2020, pág. 449). En efecto, la nueva redacción del texto legal mantuvo el núcleo de prohibición de su antecesora, con idéntica acción típica y características, pero su estructura "se adecua a una mejor técnica legislativa precisándolo con el agregado de las finalidades de 'colaborar' o 'coadyuvar'". En este sentido, la voluntad del legislador siempre estuvo clara (...) la idea era criminalizar las organizaciones que prestaran algún 'servicio' que permitiera a los obligados realizar los delitos tipificados por la ley. Así parece haberlo concluido la jurisprudencia al calificar esas agrupaciones como artículo 210 del Código Penal o 15, inciso c, según sea la ley aplicable al momento de su formación o permanencia, y al considerar al segundo como supuesto especial del primero (CFCP, Sala IV, "Santiago, Oscar Lucas





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B  
FCB 5841/2020/9/CA3

y otros s/recurso de casación”, reg. 641/17.4, 5.06.2017)  
(ob. cit., pág. 453).

Con estas modificaciones, se aprecia que la voluntad del legislador ha sido dar por tierra la antigua discusión acerca del carácter, desde el punto de vista de la autoría, de delito especial de la figura en su anterior redacción por la única finalidad que preveía de “cometer” delitos tributarios, tratándose -en los nuevos términos- de un delito común. Ello así, toda vez que, con el agregado de los términos “colaborar” o “coadyuvar” en cualquiera de los delitos del régimen penal tributario -como finalidades de la asociación-, no cabe más que entender que la comisión del delito no requiere de cualificación en el autor, pudiendo serlo cualquier persona que realice el tipo penal, con dominio del hecho, con independencia de que este reúna o no la condición de obligado tributario.

Por lo demás, resulta plenamente aplicable todo lo expresado respecto de la figura de asociación ilícita fiscal en su anterior redacción. En este sentido, conforme al texto legal citado, la figura penal en juego exige para su configuración: 1) un pacto o acuerdo de voluntades para conformar una agrupación criminal; 2) la intervención de tres o más personas; 3) habitualidad en las actividades de la organización; 4) pluralidad de fines delictivos, de naturaleza tributaria. En orden a la existencia del acuerdo criminoso, la conformación de la organización delictiva en trato exige en los sujetos activos conductas exteriorizadas que permitan presumir, sin duda alguna, que esas actividades fueron realizadas con pertenencia a la asociación. Por ello, el núcleo del tipo penal reprime la acción de “formar parte” de una organización criminal, que debe estar compuesta por tres o más personas, destinada a ~~cometer, colaborar o coadyuvar ilícitos~~ tributarios.

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982

Asimismo, se trata de un delito donde la pluralidad de intervinientes es otro de los fundamentos de su punición, igual que la figura de asociación ilícita del art. 210 del CP. En efecto, no sólo tiene por objeto la protección de los mismos bienes jurídicos que tutela el régimen penal tributario, sino también, del orden público, pues se trata de un delito pluriofensivo.

En este punto, reitero lo dicho en pronunciamientos anteriores (LEGAJO DE APELACIÓN de TAPIERO, Rodolfo Luis y otros en autos: TAPIERO, Rodolfo Luis y otros por Infracción Ley 24.769, Expte. FCB 8191/2020/14/CA6, del 7/12/21), en cuanto considero que el delito de asociación ilícita fiscal se comporta como una figura especial del art. 210 del C. Penal, ya que tiene por finalidad específica la comisión indeterminada de ilícitos de naturaleza fiscal. Sobre el particular, comparto lo expuesto por la doctrina cuando sostiene que el bien jurídico tutelado por el delito de asociación ilícita fiscal presenta una configuración compleja donde confluye la protección del orden público del tipo penal básico del art. 210 del C. Penal y el objeto de protección de los delitos del régimen penal tributario (Riquert, Marcelo. "Régimen penal tributario y previsional. Ley 27.430. Comentada. Anotada", Ed. Hammurabi, Buenos Aires, año 2018, Pág. 270).

En cuanto al elemento habitualidad, considero que además de ser entendido como un sinónimo de permanencia de la organización criminal, también debe referirse a la reiteración de aquellos actos delictivos como propósito final. Finalmente, debo decir respecto del último requisito típico de la figura penal en trato, que **el fin delictivo de la asociación debe ser su propósito preponderante sin que ello implique exigir siquiera el comienzo de ejecución de**

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B  
FCB 5841/2020/9/CA3

**aquellos delitos que son objeto de ella**, en función de su carácter autónomo.

Por su parte, en orden general y por sus caracteres comunes, respecto de la figura de “asociación ilícita” (art. 210, CP) la doctrina argentina coincide en señalar los siguientes elementos del delito: a) tomar parte en una asociación; b) número mínimo de partícipes; c) propósito colectivo de delinquir. La acción prevista en el tipo consiste en tomar parte en una asociación o banda. **Para la punibilidad de la conducta es suficiente con el mero “asociarse”, de tal modo que, fuera de la existencia del pacto, no sería necesaria ninguna actividad exterior.**

La existencia del grupo tiene por base un acuerdo entre sus miembros o “pacto”, que no requiere formalidad alguna y que puede, asimismo, ser tácito, espontáneo. Es suficiente con que de la conducta total del autor se derive que él sujeta su voluntad a la del grupo, y de ese modo, se inserta en la organización. El carácter de miembro, por lo tanto, puede derivar de la propia realización de actividades en común. No se requiere una declaración de ingreso formal a la asociación, siendo necesario que haya existido, al menos, alguna exteriorización de la conducta de sus integrantes que permita a todos ellos reconocerse entre sí como pertenecientes a un conjunto que comparte objetivos comunes, esto es, que la asociación se forma para cometer, colaborar o coadyuvar en delitos, si bien no hace falta que exista trato personal entre los miembros. Desde el punto de vista del tipo subjetivo, el delito de asociación ilícita no presenta particularidades especiales. El conocimiento de los elementos del tipo objetivo supone que el autor conoce que su conducta realiza un aporte a un grupo formado por al menos dos miembros más, cuyo objetivo ~~es la comisión o colaboración en delitos~~ como objetivo

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982

principal de la asociación. La sola conciencia de que el logro del fin que la agrupación se propone exigirá la comisión o colaboración ocasional o eventual de algunos delitos no basta. No es necesario que conozca la identidad de los otros integrantes, sino sólo su existencia y la naturaleza del pacto que los vincula. Tampoco debe conocer concretamente los delitos planteados o cometidos por otros miembros. El error de prohibición sobre la punibilidad de los fines de la asociación o bien, el desconocimiento de la actividad de la asociación excluye el dolo, si bien es suficiente el dolo eventual (Patricia S. Ziffer, "El delito de asociación ilícita", Ed. Ad. Hoc, págs. 67/82).

Bajo tales parámetros, ha de examinarse el mérito reunido en orden a la presunta intervención dolosa de los imputados Joaquín y Germán Rocca, Baldovino y Micoli en los hechos delictivos que les atribuyen.

En primer lugar, y respecto de los argumentos defensivos relativo a la existencia de infracciones administrativas y no de delitos tributarios, reitero que la asociación ilícita no requiere la concreta comisión de algún delito tributario, sino tan sólo la existencia de una asociación que tenga entre sus fines u objetivos la realización de los mismos, sin que sea necesario que esos fines se lleven a cabo.

Independientemente de ello, cabe destacar que el a quo, mediante proveído de fs. 831 de los autos principales, ordenó a la AFIP que inicie el proceso de verificación y determinación de deuda en relación a IVA, Ganancias y Aportes y contribuciones al régimen de la seguridad social, por el período comprendido entre el año 2016 hasta el momento de su dictado (21/12/21), por lo que, aún si se considerara la necesaria realización de un delito ~~tributario por parte de la asociación ilícita~~ para tenerla

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B  
FCB 5841/2020/9/CA3

por configurada, sería prematuro descartar la comisión de tales delitos.

Tal como adecuadamente fue valorado por el a quo, los imputados Germán y Joaquín Rocca junto a Marcos Baldovino, habrían explotado franquicias de heladerías de las firmas Cremolatti y Creambury ocultando su real carácter de propietarios mediante su habilitación a nombre de terceros - personas físicas y jurídicas sin capacidad económica para ello- (fs. 16 a 40 vta. de los autos ppales.), aunque en algunas de las sociedades constituidas alguno de ellos figuraba como integrante. Las sociedades señaladas son:

**Pullman SA:** desde el 20.04.2012, fue designado Germán Rocca como director titular y presidente y Marcos Baldovino como director suplente. Tiene domicilio fiscal en calle Rondeau 390 de esta ciudad. En el perfil fiscal de esta empresa, figuran como integrantes de la sociedad Joaquín Rocca, Germán Rocca y Marcos Baldovino. Su domicilio legal declarado figura en Av. 24 de septiembre 1236, of. dpto. 105. (fs. 154)

**AMNSA SA:** sociedad constituida el 2.10.2013, integrada por Rosa Micoli y Roxana Corral, con domicilio legal y fiscal en Av. 24 de septiembre 1011 de barrio General Paz de esta ciudad. El capital de la firma estaba represado por 100 acciones, de las cuales 99 pertenecían a Micoli y sólo 1 a Corral (fs. 141 y fs. 297vta./298).

**LTA SA:** creada el 27.11.2014, integrada por Oscar Rossi y Mauro Poffo, con sede en Av. 24 de septiembre 1236, piso 1, dpto. 103 de barrio General Paz de esta ciudad, con el objeto, entre otros, de la explotación comercial de heladerías. Su domicilio fiscal declarado era en Rondeau 398 (fs. 95).

---

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982

**Eletea 1086 SA:** creada el 19.12.2014, integrada por Oscar Rossi y Mauro Poffo, con sede en Av. 24 de septiembre 1236, piso 1, dpto. 103 de barrio General Paz de esta ciudad, con el objeto, entre otros, de la explotación comercial de heladerías. Su domicilio fiscal fue declarado en Buenos Aires 601 de esta ciudad (fs. 93). En el perfil fiscal figura como cotitular de cuentas German Rocca (fs. 108). Esta sociedad sería la titular de la franquicia de Creambury sita en ese último domicilio señalado (fs. 127 vta.).

**Suertudo SA:** creada el 29.03.2016 e integrada por Oscar Rossi y Eric Alejandro Scurta, con sede en Av. 24 de septiembre 1236, piso 1, dpto. 103 de barrio General Paz de esta ciudad, con el objeto, entre otros, de la explotación comercial de heladerías. Esta sociedad, con domicilio fiscal confirmado en Av. 24 de septiembre 1011, al momento del informe de AFIP, registraba su clave inactiva. (fs. 90)

**Mopa 1086 SA:** creada el 14/6/17 e integrada por Baldovino y Germán Rocca, con domicilio en Figueroa Alcorta 181 de esta ciudad, con el objeto de explotar comercialmente negocios de heladerías, entre otros. En la sede de esta sociedad, funcionaba al momento de la constatación una heladería Creambury (fs. 59 vta. de los autos ppales., si bien aquí figura como Mopa 1886 SA). Su domicilio fiscal es en Nazaret 3176, dpto. 33 de esta ciudad (fs. 151), lugar donde habría residido Baldovino al momento del informe de la PSA obrante a fs. 183/188.

**Wadiya SAS:** creada el 06.09.2018 e integrada por Franco Sebastián Sosa, con sede en calle Betania 3171, torre /local Casa N°1 de barrio Bajo Palermo de esta ciudad, siendo designado administrador titular Germán Rocca. Esta sociedad sería quien explotaba comercialmente

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B  
FCB 5841/2020/9/CA3

la heladería Cremolatti sita en Independencia 1017 de esta ciudad y ese era el domicilio fiscal declarado por la sociedad (ver informe de la PSA de fs. 60 vta. y fs. 99).

**Andalao SA:** fue constituida el 27.07.2020, integrada por Marcos Baldovino y Germán Rocca, se encuentra activa desde el 08/2020 en el domicilio de Figueroa Alcorta 181 (informe de fs. 234/238).

**Noplag SAS:** creada el 26/12/2019 e integrada por Germán Rocca y María Luz Gómez, con sede en Bv. San Juan 511 de esta ciudad. Es de destacar que en este domicilio funcionaba un local de la marca Cremolatti (según informe de la PSA obrante a fs. 59 de los autos ppales.).

**Colectivo 60 SAS:** empresa con domicilio fiscal en Nazaret 3176, dpto. 33 de esta ciudad (era el domicilio de Baldovino), inscripta en AFIP desde el 31/1/2019.

**Dunk SA:** creada el 25.04.2011, integrada por Joaquín y Germán Rocca y por Marcos Baldovino, con sede en Pueyrredón 85, piso 7, dpto. A de esta ciudad, con el objeto, entre otros, de comercializar mercaderías, productos y servicios afines a la rama gastronómica y a la comercialización de productos alimenticios. Ese es el domicilio fiscal declarado de Germán Rocca (fs. 117 de los autos ppales.)

De la información referida, y de la planilla obrante a fs. 168, se puede observar: que en el domicilio de Av. 24 de septiembre 1011 donde funcionaba la firma Creambury, dicha marca fue explotada por Dunk, AMNSA y Suertudo (todas inactivas); la franquicia de Creambury de calle Rondeau 390/398 fue explotada por Pullman y LTA (ambas inactivas); y las franquicias de Cremolatti de San Juan 511 y de Independencia 1017 son explotadas por Noplag y por Wadiya respectivamente (activas al momento del informe). Por su parte, las franquicias de Creambury de

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982

Buenos Aires 601 y de Figueroa Alcorta 181, pertenecen a Eletea 1086 y a Mopa 1086 respectivamente y se mantienen activas (fs. 168/170).

Por otra parte, no puede dejar de destacarse que la imputada Micoli, si bien sólo figura como socia en AMNSA, sería garante de Eletea 1086, de Suertudo y de LTA (ver planilla de fs. 168).

A más de ello, lo que se desprende fácilmente de la lectura de los informes referidos es que una determinada franquicia era explotada por distintas sociedades que continuaban con el negocio luego de la disolución o inactivación de la precedente, y que tanto a unas como a otras se encontraban vinculados, de distinta manera, los imputados Joaquín Rocca, Germán Rocca, Marcos Baldovino y Rosa Marta Micoli.

Por otra parte, y en relación a la falta de registración de algunos empleados del grupo formado por los hermanos Rocca y Baldovino, al momento de efectuarse los allanamientos ordenados por el a quo en los locales comerciales explotados por ellos, se realizó un informe del que se desprende que muchos de los empleados del grupo no habían sido declarados como tales (fs. 597/vta.). Sumado a ello, al momento de prestar declaración testimonial uno de los empleados de la heladería sita en calle Buenos Aires 601 (Creambury) manifestó trabajar en relación de dependencia para la heladería desde el año 2017 y haber sido registrado después de la pandemia, concretamente señaló: *"Que actualmente se encuentra registrado. Que al principio no..."* (fs. 1005/6). Ello permite afirmar, sin que pueda entenderse como adelanto de opinión, que es prematuro negar de forma absoluta la existencia y responsabilidad de los imputados en el delito de evasión de recursos de la seguridad, tal como lo sostiene la defensa.

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B  
FCB 5841/2020/9/CA3

Por todo lo expuesto, entiendo que corresponde tener por acreditado, con el grado de probabilidad requerido en la instancia, la participación de Joaquín Rocca, Germán Rocca y Marcos Baldovino como jefes de la asociación ilícita fiscal que se les atribuye en el hecho primero y de Rosa Micoli como miembro de la misma, confirmando así el procesamiento de los nombrados por este delito y rechazando el recurso interpuesto respecto de este hecho.

**IV.** En cuanto a la apelación interpuesta por el Dr. Baccino en contra **del procesamiento de Marcos Baldovino por el delito de lavado de activos agravado** y el dictado de su prisión preventiva, adelanto mi criterio de que el recurso interpuesto debe ser rechazado.

Conforme el hecho descripto en la pieza requisitoria de fs. 363/70, se le atribuye a Marcos Baldovino habría introducido al circuito económico legal, parte de los activos provenientes de las maniobras delictivas descriptas en el hecho segundo de ese requerimiento fiscal (evasión de aportes al régimen de la seguridad social), con la finalidad de darles la apariencia de un origen lícito.

Señala el requerimiento fiscal que la principal operación de lavado habría consistido en la compra/venta de bienes muebles que habría adquirido y/o transferido ocultando su participación mediante la interposición de una sociedad por acciones simplificada - Colectivo 60 SAS-.

Se afirma, en la imputación formulada, que *"A través de la reiteración de estos hechos, diversos pero vinculados entre sí, habría puesto en circulación dándole apariencia legal, a un monto de dinero aún no determinado con exactitud, pero que como mínimo, supera la suma de 1.265.000 pesos, a través de la adquisición de una*

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982

camioneta VW Amarok 2.0 dominio AB223YE, la cual fue inscripta a nombre de Colectivo 60 SAS - constituida únicamente por Marcos Javier Baldovino - con fecha 24 de abril de 2019, y cuyo valor ascendía por aquella época a la suma aproximada de \$ 1.265.000, empresa que autorizó a Baldovino a conducir el vehículo."

Delimitados así los hechos y la prueba relacionada, en primer lugar, debo decir que la conducta de blanquear activos, como modalidad específica de encubrimiento, fue derogada por el legislador al eliminar el tipo penal previsto en el art. 278 del CP, T.O. conf. Ley 25.246; mientras que, en paralelo, se incorporó al plexo punitivo un nuevo delito que prevé una conducta en su aspecto nodular idéntica a esta, cual es la definida en el art. 303 del Código Penal.

A este respecto, una inteligencia correcta de las leyes que se sucedieron en el tiempo (leyes 25.246 y 26.683), permite advertir que la conducta prohibida es, en esencia, la misma.

En otras palabras, se ha dicho que: "el fenómeno criminal no ha variado substancialmente, sino que lo que se modificó es la valoración que hizo el legislador respecto de los intereses preponderantemente afectados por aquélla, y los cambios en la redacción del tipo penal obedecen a ese cambio de valoración, en tanto buscan poner el énfasis en los aspectos de la conducta prohibida que vulneran el orden socioeconómico, en vez de privilegiar lo atinente a la afectación de la administración de justicia... En ese orden de ideas, en el lavado de activos la cuestión de si se afecta la administración de justicia (reprimida en el antiguo art. 278) o el orden socioeconómico (sancionada en el art. 303) no surge de una ~~diferencia en el modo en que se llevan adelante las~~

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B  
FCB 5841/2020/9/CA3

*conductas de lavado de activos (que pueda ser reflejada en un cambio en la descripción típica). Por el contrario, el accionar de los lavadores es, en cualquier caso, básicamente el mismo, y repercute en ambos bienes jurídicos.... Dicho de otro modo, la conducta que en su momento estuvo tipificada en el art. 278.1 del código de fondo nunca dejó de estarlo, sino que lo único que se modificó es la concepción del legislador respecto de que bien jurídico era afectado, de modo predominante, por ese accionar típico"* (conf. Blanco, Hernán en "La reforma del tipo penal de lavado de activos y la ley penal más benigna, en revista Pensamiento Penal, 04.07.2013; el resaltado me pertenece).

En esta línea, la Sala I de la CFCP sostuvo que la interpretación integral de la normativa en cuestión no permite sino concluir que *"anteriormente esta figura legal estaba regulada por el art. 278, pero a partir de la reforma introducida por la ley 26.683 este delito aparece ahora ubicado en el art. 303 del Cód. Penal, con lo cual no existió una derogación del primero fruto de esta última reforma"* (CNCP, Sala I, causa n° 1686, "Bustamante, del 26/5/16, Reg. N° 873/16; citado por ABOSO, Gustavo Eduardo, "Código Penal de la República Argentina, Comentado, Concordado con jurisprudencia, 4ª edición, p. 1492)".

Por su parte, la doctrina ha señalado que esta reforma *"... apuntó a regular el tipo penal de encubrimiento en forma específica en el art. 277 del Cód. Penal, incluyendo la figura básica, sus agravantes y las excusas absolutorias... A partir de la nueva regulación, la figura de lavado de dinero, que con anterioridad era concebida como una especie de agravada de aquellas conductas tendientes a encubrir únicamente a los delitos relacionados con el narcotráfico, amplía su campo de*

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982

*aplicación a los supuestos en que la procedencia de los activos parta de otros delitos precedentes de especial gravedad...” (Ibídem, pág. 506).*

En efecto, el lavado de activos se trata de un delito pluriofensivo, en tanto menoscaba simultáneamente a la administración de justicia, al orden socioeconómico, a la transparencia del sistema financiero o la legitimidad de la actividad económica, e incluso a la salud pública, como en los casos de narcotráfico (cfr. Llenera, Patricia, “Lavado de Dinero”, Revista del Ministerio Público Fiscal, N° 0, pág. 39 y ss.).

Es importante destacar que la Cámara Federal de Casación Penal, al valorar la prueba en un caso de lavado de activos (en su redacción anterior, conf. art. 278 del Cód. Penal), estableció los parámetros probatorios a considerar al momento de evaluar maniobras de blanqueo de capitales. De este modo, con cita de profusa doctrina y jurisprudencia, se dijo que *“el blanqueo es una actividad criminal muy compleja, que se vale de un inagotable catálogo de técnicas o procedimientos en continua transformación y perfeccionamiento, y en el que la vinculación con el delito previo no puede supeditarse a la estricta aplicación de las reglas de la accesoriedad que puedan condicionar su naturaleza de figura autónoma... De allí que para acreditar el delito precedente y su enlace con el consecuente (el lavado) la prueba de indicios sea especialmente idónea y útil para suplir las carencias de la prueba directa en los procesos penales relativos a estas y otras actividades delictivas encuadradas en lo que se conoce como criminalidad organizada, y evitar así las parcelas de impunidad que podrían generarse en otro caso respecto a los integrantes de estas organizaciones delictivas. En la práctica procesal penal será habitual*

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B  
FCB 5841/2020/9/CA3

*que no exista prueba directa de estas circunstancias, y al faltar ésta deberá ser inferida de los datos externos y objetivos acreditados... (prueba de presunciones o prueba de indicios)". (conf. CFCP, Sala III, Expte. CN 1313/13, reg. 2377, rta. 11/11/2014, el resaltado me pertenece).*

En el mismo precedente, la Cámara de Casación -tras citar la doctrina del Tribunal Supremo de España, Sala penal, en el caso STS 3614/1997), concluyó que *"para la reconstrucción material de los hechos propios del delito de blanqueo de capitales resulta lícito recurrir a la prueba de indicios, y que la determinación de la existencia del hecho puede válidamente utilizarse -como indicios salientes, y de particular significación probatoria- **la comprobación de que los acusados registran movimientos patrimoniales injustificados, que carecen de actividad comercial o profesional lícita que justifique o sustente tal giro patrimonial, y que poseen vínculos o conexiones con actividades ilícitas, o con personas o grupos que llevan a cabo tales actividades**"* (fallo citado; el destacado me pertenece).

En esta inteligencia, pues, para que pueda configurarse el delito previsto por los arts. 278 (texto según ley 26.364) y 303 del Cód. Penal, no es necesario que la existencia del delito precedente o ilícito penal haya sido declarada en sentencia firme, sino que **basta con la prueba indiciaria**, *"traducida en la necesidad de que existan indicios graves, precisos y concordantes que generan la presunción de que el origen de los bienes es espurio"* (conf. Ponce, Juan Cruz. "El delito de lavado de Activos", Ed. Ad-Hoc, Bs. As., 2014, pág. 74).

También D'Albora sostiene, al analizar la figura del art. 278 del C.P., que la referencia al delito como ~~elemento típico apunta al concepto de conducta~~ penada por

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982

la ley y será necesario como presupuesto *"que se haya cometido un 'delito', entendido como tipo legal abstracto que, desde el punto de vista dogmático, exige que sea típico y antijurídico. Si concurre a su respecto una causa de justificación o si la conducta es atípica, no podrá sancionarse la conducta de lavado de dinero posterior. En cambio, si se trata de causas de inimputabilidad, de exculpación, de error de prohibición invencible, excusas absolutorias, límites funcionales a la aplicación de la ley penal o inexistencia de condiciones objetivas de punibilidad, el precepto es plenamente aplicable."* (D'Albora, Francisco J., "Lavado de dinero", Ed. Ad-Hoc, Bs. As., 2011, pág. 70 y sig.)

En tal sentido, reseña Ponce, la Sala I Cámara Nacional de Casación Penal en autos *"Orentrajch"* se ha expedido respecto de que *"la procedencia criminal de los bienes objeto de blanqueo no requiere sino la comprobación de una actividad delictiva previa de modo genérico que, según las circunstancias del caso, permita la exclusión de otros orígenes posibles, 'sin que sea necesaria ni la demostración plena de un acto delictivo específico ni de los concretos partícipes en el mismo...'"* (Ponce, ob. cit.).

También la Sala IV de ese mismo tribunal de Casación, sostuvo en relación al delito de lavado de activos, que su configuración exige que se haya acreditado el tipo objetivo del delito precedente *"pero no requiere el dictado de una sentencia condenatoria firme respecto de dicho delito"* (C.N.C.P., Sala IV, en autos *"Álvarez, Guillermo..."*, registro N° 1130/15.4 del 12.06.2015).

Tal como he sostenido en anteriores pronunciamientos, respecto del nexo de causalidad entre los bienes originarios y los bienes *"blanqueados"*, cabe ~~expresar que el delito de lavado de activos se caracteriza~~

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B  
FCB 5841/2020/9/CA3

por el uso de particulares y complejas operatorias, con las que se intenta borrar los rastros del dinero obtenido mediante actividades ilícitas. Así, se busca desvincular o desconectar del verdadero propietario de los fondos a los bienes que se adquieren que esos fondos. No debe olvidarse, que el objetivo es darles a los bienes la apariencia de lícitos.

En este esquema, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, en fallo reciente destacó que *"... si bien cualquier actividad económica puede ser utilizada para blanquear capitales, algunos sectores son más idóneos que otros. Además, el avance en la implementación de medidas preventivas, ha provocado una doble reacción por parte de los autores de este delito, ya que han indagado nuevas vías y procedimientos de utilización del sistema financiero, produciéndose un desplazamiento de la actividad de blanqueo a otros sectores de la actividad económica. Por ello, dentro de todas las técnicas que existen, resulta común la intermediación de personas jurídicas para ocultar la titularidad real y el origen de los bienes utilizados, la compra venta de inmuebles, siendo éste un vehículo habitual de blanqueo, ya que son bienes relativamente líquidos y su valor no es fácil de estimar. También destaca que la mezcla de dinero lícito dificulta enormemente la prueba del delito y la identificación del capital sucio (Cfr. [Mateo Bermejo] Prevención y Castigo del Blanqueo, un análisis jurídicoeconómico, Ed. Marciel Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2015)"* (CFSM en autos: "CORVO DOLCET", Expte. FSM 45/2017/14/CA6, rta. 27.11.2018).

Dicho ello, y en cuanto a la imputación que pesa sobre Marcos Baldovino, por el delito de lavado de activos ~~agravado, entiendo que se encuentra~~ acreditada su

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982

responsabilidad en el hecho, con el grado de probabilidad requerida en esta instancia, y en consecuencia, el auto apelado debe ser confirmado en cuanto así lo dispuso.

Ello así, toda vez que de la valoración efectuada por el a quo y de la prueba obrante en autos se advierte que la firma **Colectivo 60 SAS**, constituida el 24.01.2019, era integrada sólo por Marcos Baldovino. Dicha empresa fijó como sede y domicilio fiscal en Nazaret 3176, dpto. 33 de esta ciudad (era el domicilio de Baldovino). Fue inscripta en AFIP el 31/1/2019, pero al 20/4/21 solamente presentaba declaraciones juradas de IVA en cero, sin encontrarse inscripta como empleadora. Según información aportada en autos, no habría desarrollado actividad comercial alguna desde su inscripción en AFIP y sería la propietaria del vehículo Amarok 2.0 dominio AB223YE, con autorización para conducir otorgada a Marcos Baldovino (fs. 259, 264 y 284/6vta.). Es de destacar que el vehículo referido, previo a la adquisición por parte de Colectivo 60 SAS, pertenecía a Baldovino, quien fue su propietario desde el 26.04.2017 hasta su traspaso a la referida sociedad el 24.04.2019 conforme surge de las constancias obrantes en autos. (fs. 106). Por otra parte, según constancia de fs. 283, el valor de dicho vehículo ascendía a \$1.265.000 en el año 2017.

Todos esos datos, analizados en conjunto, permiten advertir, tal como lo sostuvo el a quo, que la firma en cuestión habría sido creada a los fines de desviar fondos provenientes de las otras empresas que eran integradas por Baldovino.

Por otra parte, no puede dejar de destacarse que al momento de ser indagado Baldovino manifestó que por su trabajo percibía aproximadamente la suma mensual de \$100.000. El nivel de ingresos declarado por el nombrado no ~~le habría permitido ser propietario, hasta el año 2019, de~~

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B  
FCB 5841/2020/9/CA3

una camioneta de alta gama, por lo que es fácil advertir que los fondos con que tal vehículo se habría adquirido serían de origen ilícito. Lo mismo puede decirse de la adquisición de la referida camioneta por parte de la empresa unipersonal creada por Baldovino -Colectivo 60 SAS-. Una firma que no desarrollaba actividad económica alguna, no tenía empleados registrados, pertenecía a un solo socio (Baldovino) y con nula capacidad económica para adquirir el bien referido, permite presumir que era utilizada a fin de blanquear el dinero ilícitamente generado por Baldovino a través de sus otras empresas.

Ahora bien, es pertinente señalar que tanto el Sr. Fiscal como el juez instructor califican, provisoriamente, el hecho que se le atribuye a Baldovino como *"Lavado de Activos agravado por la utilización de una persona de existencia ideal (art. 303 inc. 1, inc. 2 apartado "a" y art. 304 del Código Penal)"*, sin advertir que la figura básica de lavado de activos (art. 303) no es agravada por la utilización de una persona jurídica, sino que la norma del art. 304 del CP sólo establece sanciones dirigidas a la sociedad, por lo que no corresponde aplicarle a Baldovino la figura agravada en virtud del art. 304 del CP, sino tan sólo la agravante del inciso 2 apartado a).

Por todo lo expuesto, y tal como adelanté previamente, debe confirmarse el procesamiento de **Marcos Baldovino** por el delito de lavado de activos agravado que le atribuye (conf. art. 303 inc. 1 e inc. 2 apartado a) del Código Penal).

V. Por otra parte, en cuanto a la apelación interpuesta por el **procesamiento de Germán Rocca por el delito de lavado de activos**, en primer lugar, entiendo ~~pertinente transcribir el hecho, tal como fue fijado en el~~

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982

requerimiento fiscal de instrucción, el cual reza: "En el marco de las actividades descriptas en los hechos nominados como primero y segundo del requerimiento de instrucción de fecha 1 de julio de 2021, German Rocca habría introducido al circuito económico legal, parte de los activos provenientes de las maniobras delictivas relatadas, con la finalidad de darles la apariencia de un origen lícito.

La principal operación de lavado referida, habría consistido en la compra/venta de bienes muebles que habría adquirido y/o transferido.

A través de la reiteración de estos hechos, diversos pero vinculados entre sí, habría puesto en circulación dándole apariencia legal, a un monto de dinero aún no determinado con exactitud, pero que como mínimo, supera la suma de 1.867.856,71 pesos, a través de la adquisición de los siguientes vehículos:

1) Motocicleta Ducati Supersport S dominio A113VGE, la cual fue inscripta a su nombre con fecha 21 de febrero de 2020, y cuyo valor ascendía por aquella época a la suma aproximada de \$ 1.483.207.

2) Motocicleta Ducatti Hyperstrada dominio A002ENU la cual fue inscripta a su nombre con fecha 19 de Julio de 2016, cuyo valor ascendía a la suma de \$ 384649,71."

De su lectura se advierte que el hecho, tal como ha sido descripto, no resultaría atípico, como alega la defensa. Por el contrario, se describe la maniobra que el imputado Germán Rocca habría realizado (adquisición de bienes registrables) con el fin de poner en circulación parte de los activos provenientes de las maniobras delictivas descriptas en los hechos primero y segundo del requerimiento de fs. 363/70 (asociación ilícita fiscal y

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B  
FCB 5841/2020/9/CA3

evasión de aportes al régimen de la seguridad social), con el fin de darles apariencia de un origen lícito. Además, los bienes inscriptos a su nombre superan la condición objetiva de punibilidad prevista en el inciso 1 del art. 303 del CP.

Dicho ello, entiendo que la prueba obrante en autos permite tener por acreditado el hecho de lavado de activos que se le atribuye a Germán Rocca.

Tal como lo sostuvo el instructor, a través de la compraventa de bienes muebles, este imputado habría puesto en circulación, con el fin de darle la apariencia de origen lícito, un monto de dinero aún no determinado con exactitud, pero superior a los \$300.000 requeridos como condición objetiva por la figura penal que se atribuye.

Así, surge de la prueba obrante en autos que con fecha 21.02.2020 habría adquirido la motocicleta marca Ducatti, modelo Supersport S, dominio A113VGE, valuada a la fecha de adquisición en la suma aproximada de \$1.483.207.

Al momento de ser indagado, Rocca manifestó que mensualmente percibe la suma de entre \$100.000 y \$130.000 por su trabajo, de lo que se advierte que la adquisición de una motocicleta de alta gama en febrero del año 2020 no se condice con los ingresos declarados por este imputado y permite presumir que dicho vehículo fue adquirido con fondos de origen ilícitos, tal como acertadamente fue valorado por el a quo.

En cuanto a la motocicleta Ducatti Hyperstrada dominio A002ENU, el a quo entendió que este bien no integra la maniobra de lavado referida y si bien el Sr. Fiscal al momento de apelar el sobreseimiento de Joaquín Rocca y Marta Micoli (por el delito de lavado de activos) hizo referencia a este bien, el lavado de activos en el que se ~~incluía a esta motocicleta (atribuido a Germán Rocca)~~ no

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982

fue apelado, por lo que no corresponde entrar a analizar esta cuestión, en perjuicio del imputado.

No obstante ello, el restante bien que se incluye en la maniobra delictiva (Motocicleta Ducatti Supersport S dominio A113VGE), adquirido el 21.02.2020, supera por si solo la condición objetiva de punibilidad prevista por el art. 303 del CP.

A más de ello, cabe señalar que Germán Rocca ha sido procesado por el delito de asociación ilícita fiscal y si bien ha sido dictada la falta de mérito a su respecto por el delito de evasión de recursos del régimen de la seguridad social, no ha sido descartada de forma total y definitiva su participación en el mismo, sino que aún resta prueba determinante para definir su situación procesal. Ello, sumado a los ingresos que manifestó percibir el imputado, permite sostener, con el grado de probabilidad requerido en la instancia, que el bien en cuestión habría sido obtenido con fondos de origen ilícito, con el objeto de darle apariencia de licitud. Por lo dicho, entiendo que corresponde confirmar el procesamiento de Germán Rocca por el delito de lavado de activos que se atribuye.

**VI.** Finalmente en cuanto al recurso interpuesto en contra del dictado de la **prisión preventiva de Baldovino**, su defensor argumentó la falta de fundamentación del auto apelado, errónea valoración de los criterios para considerar la peligrosidad procesal y la errónea valoración de la prueba.

Al respecto, debo decir que el a quo ha dado fundamentos para resolver como lo hizo, explicando adecuadamente qué elementos probatorios le permitieron arribar al dictado de la prisión preventiva de este imputado.





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B  
FCB 5841/2020/9/CA3

Así, para resolver como lo hizo, sostuvo que al momento de allanarse el domicilio sito en calle Buenos Aires 601 (el 5/8/2021), el imputado Baldovino se presentó como titular del local comercial y, consultado sobre su domicilio actual, manifestó voluntariamente que residía junto a su sobrina, en Bv. Chacabuco N° 1260, piso 6, Dpto. "D", B° Nueva Córdoba, de esta ciudad de Córdoba. Luego de sus manifestaciones se ordenó ese mismo día el allanamiento de ese último domicilio señalado por el imputado y, apersonado él junto con el personal actuante, abrió el acceso al edificio y una vez en el piso 6 y al momento de la lectura del acta se constató que la numeración real del edificio no coincidía con la aportada por Baldovino, por lo que, a fin de evitar nulidades, se dispuso cancelar el procedimiento.

Luego de efectuada esa reseña, el a quo señaló: *"Que tal conducta, debe valorarse negativamente para el justiciable, máxime si se tiene en cuenta que al receptarle declaración indagatoria (fs. 610/610vta) y al ser interrogado por sus datos personales brindó un domicilio de residencia (Miradores de Manantiales dos (2), Lote 18, Manzana 108, Duplex "A" de la ciudad de Córdoba) distinto al domicilio erróneo por el cual se ordenó el allanamiento que terminó finalmente frustrado (ver constancias de fs. 411/425vta). A ello cabe agregar que al momento de solicitar el beneficio de exención de prisión (ver fs. 572/575vta), el nombrado denunció que su domicilio real es en "Miradores de Manantiales dos (2), Lote 18, Manzana 108, de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, inmueble del cual soy locatario desde el mes de julio del corriente año" (el resaltado me pertenece). En otras palabras, con fecha 05 de Agosto del 2020, al momento de practicarse el allanamiento del domicilio sito*

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982

en calle Buenos Aires N° 601 de esta ciudad de Córdoba, **Marcos BALDOVINO** expuso al personal policial actuante que su domicilio real era en Bv. Chacabuco N° 1260, piso 6, Dpto. "D", de esta ciudad de Córdoba, cuando en realidad hacía un mes que residía en Miradores de Manantiales dos (2).".

A tal efecto, estimo conveniente traer nuevamente a colación la postura e interpretación asumidas por el suscripto en torno al encarcelamiento preventivo desde el fallo "BOTTERI, Roberto R." (L° 268, F° 109), del 05.07.2007, en adelante (puede consultarse, en tal sentido "GAUNA, Agustín" -L° 270 F° 85-; "PIETROBÓN, Abel" -L° 272 F° 8-).

Si bien, tal como expondré en el siguiente punto, al día de la fecha rigen nuevas normas relativas al régimen de la prisión preventiva, el principio rector en la materia es el de la libertad del imputado en el proceso, admitiendo restricciones en los casos expresamente contemplados.

Así entonces, de manera preliminar, abordaré el análisis de las normas que en el Código Procesal Penal de la Nación por entonces vigente, contemplan la "eximición de prisión", advirtiendo que el principio rector en la materia es el de la libertad del imputado en el proceso, admitiendo restricciones en los casos expresamente contemplados, tal como puede leerse en el dispositivo del art. 280 de tal ordenamiento.

Sobre esa base, bajo el título "Exención de prisión. Procedencia", el artículo 316 del Código Procesal establece que "Toda persona que se considere imputada de un delito, en causa penal determinada, cualquiera sea el estado en que ésta se encuentre y hasta el momento de dictarse la prisión preventiva, podrá, por sí o por ~~terceros, solicitar al juez que entienda en~~ aquélla su

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B  
FCB 5841/2020/9/CA3

exención de prisión. El juez calificará el o los hechos de que se trate, y cuando pudiere corresponderle al imputado un máximo no superior a los ocho (8) años de pena privativa de la libertad, podrá eximir de prisión al imputado. No obstante ello, también podrá hacerlo si estimare *prima facie* que procederá condena de ejecución condicional, salvo que se le impute alguno de los delitos previstos por los artículos 139, 139 bis, y 146 del Código Penal...".

Por su parte, el artículo 319 del mismo cuerpo normativo se ocupa de precisar las "Restricciones" a las cuales se deben someter los casos de eximiciones de prisión o excarcelaciones respectivamente, disponiendo -en concreto- que "Podrá negarse la exención de prisión o excarcelación, respetándose el principio de inocencia y el art. 2° de este Código, cuando la objetiva y provisional valoración de las características del hecho, la posibilidad de la declaración de reincidencia, las condiciones personales del imputado o si éste hubiere gozado de excarcelaciones anteriores, hicieren presumir, fundadamente, que el mismo intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones".

El cuadro normativo se completa, pues, con la disposición legal del artículo 26 del Código Penal que, en el marco del Título III y bajo la designación "Condenación condicional", prescribe que "En los casos de primera condena a pena de prisión que no exceda de tres años, será facultad de los tribunales disponer en el mismo pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Esta decisión deberá ser fundada, bajo sanción de nulidad, en la personalidad moral del condenado, su actitud posterior al delito, los motivos que lo impulsaron a delinquir, la naturaleza del hecho y las demás

---

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982

circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de libertad...".

Hay que mencionar que, a su vez, el Informe Anual N° 1995 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, plantea al principio de inocencia como presunción que juega a favor del acusado de un delito, según la cual éste es considerado inocente mientras no se haya establecido su responsabilidad penal en sentencia firme. De este modo, para establecer la responsabilidad penal del imputado, el Estado debe probar su culpabilidad más allá de toda duda razonable (Capítulo III - Perú, 10.970).

Sin duda que la máxima en virtud de la cual el justiciable no es considerado culpable hasta que una sentencia judicial firme así lo indique, tras la sustanciación de un proceso regular, equivale a decir -ni más ni menos- que durante el desarrollo del proceso judicial el acusado debe ser tratado como un inocente (cfse. POVIÑA, Fernando, *La garantía de la libertad del imputado durante el proceso penal y la prisión preventiva*, Rev. La Ley, Suplemento Penal 2007, p. 10).

Ahora bien, semejante tratamiento del imputado a lo largo del proceso no significa que no se apliquen sobre él medidas de coerción de ninguna naturaleza, sino -antes bien- que la imposición de éstas se ve seriamente restringida a raíz del mentado principio de inocencia.

En tal sentido, se ha dicho que: *"...sin una orden y sin límites para la libertad resulta imposible que exista la libertad constitucional. La relación armónica entre los individuos y la organización política global impone necesariamente restricciones para la libertad, que son expresadas en las normas jurídicas que la regulan. En toda sociedad políticamente organizada la libertad aparece limitada por el orden que ella establece. Pero en un*

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B  
FCB 5841/2020/9/CA3

*sistema democrático constitucional esas limitaciones a la libertad deben ser razonables y responder a la necesidad de salvaguardar los intereses individuales y los de la comunidad. Es por ello que las limitaciones a la libertad no pueden conducir a su total desconocimiento y sus regulaciones deben ser objeto de una interpretación restrictiva..."* (cfme. Gregorio BADENI, Instituciones de derecho constitucional, Ed. Ad-Hoc., Bs.As., 2000, p. 220).

También se ha dicho que *"...para llevar a cabo el proceso penal son indispensables la injerencias en la esfera individual... tanto para asegurar el proceso de conocimiento como para asegurar la ejecución penal..."* (cfme. Claus ROXIN, Derecho Procesal Penal, traducción de la 25ª edición alemana de Gabriela E. CÓRDOBA y Daniel R. PASTOR revisada por Julio B. MAIER, Ed. Del Puerto, Bs.As., 2000, p. 249).

Así entonces, la afirmación de que el imputado no pueda ser sometido a una pena y, por ende, no pueda ser tratado como culpable hasta que una sentencia firme así lo declare, constituye el principio para expresar los límites de las medidas de coerción procesal contra el acusado (cfme. MAIER, Julio B., *Derecho procesal penal*, Ed. Ediar, Bs.As., 1960, p. 512). Si bien esas medidas suponen la utilización del poder estatal para privar a los individuos de derechos garantizados por el orden jurídico, resulta necesario diferenciarlas de las medidas de coerción material (las que tienen como fin la aplicación de una pena ante un delito).

Si afirmamos que el fin del Derecho procesal penal se traduce en la correcta averiguación de la verdad y la actuación de la ley penal (véase, en tal sentido, VÉLEZ MARICONDE, ~~Alfredo~~, *Derecho Procesal Penal*, T.II, Ed.

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982

Lerner, Cba., 1969, p. 475 y ss.), podemos concluir, por tanto, que la meta del procedimiento penal está dada por la decisión acerca de la punibilidad del imputado: 1) materialmente correcta; 2) obtenida de conformidad con el ordenamiento jurídico procesal; 3) que restablezca la paz jurídica (cfse. ROXIN, Claus, *Derecho Procesal Penal*, Ed. Del Puerto, Bs.As., 2000, p. 2, trad. de Gabriela E. CÓRDOBA y Daniel R. PASTOR, revisada por Julio B. MAIER).

En función de lo expresado, es dable aseverar que la coerción procesal no tiene como propósito satisfacer una reacción del derecho frente a la infracción de una norma de deber, sino el *"resguardo de los fines que persigue el mismo procedimiento, averiguar la verdad y actuar la ley sustantiva, o en la prevención inmediata sobre el hecho concreto que constituye el objeto del procedimiento"* (véase, MAIER, Julio B., *La Ordenanza procesal penal alemana*, Vol. II, Ed. Depalma, Bs.As., 1982, p. 101). En otros términos, en el Derecho procesal penal, más allá de los fines preventivos inmediatos, el fundamento de una medida de coerción reside en el **"peligro de fuga del imputado"** o, bien, en el **"peligro de que se obstaculice la averiguación de la verdad"** (ob. cit., pág. 515/4) (el resaltado me pertenece).

Sobre esa base se entiende que una interpretación sistemática de los artículos 316, segunda parte, y 317, primer inciso, del C.P.P.N. indica que, como regla, la libertad procesal (no-prisión preventiva) tiene relación inmediata con la *penalidad* del delito imputado y es aceptable si: a) La pena máxima del delito no fuera superior a los ocho años de pena privativa de la libertad; o, bien, b) aunque la pena máxima fuera mayor a ese límite, cuando el juez estime *"prima facie"* que procederá una ~~condena de ejecución condicional~~ (SANDRO, Jorge A.,

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B  
FCB 5841/2020/9/CA3

*Condiciones de la prisión procesal*, Rev. La Ley, 2005-C, p. 638).

A ello se suma que el artículo 319 del Código de Forma establece las restricciones o limitaciones de la disposición general; agregando así que, incluso dentro de la franja o *envolvente* de los delitos excarcelables por razón de la penalidad, es posible denegar la exención de prisión o excarcelación si hubiere datos objetivos y motivos fundados para presumir el peligro de fuga o de entorpecimiento de las investigaciones por parte del inculcado (*ibídem*).

De acuerdo a lo apuntado, la regla de excarcelación principal (arts. 316, 317, inc. 1°, del C.P.P.N.) es de interpretación *flexible* y, para respetar la garantía constitucional del *estado de inocencia*, debe ser complementada por el test mínimo de las tres *indicaciones de fuga o entorpecimiento* judicial. Se entiende, además, que la regla de la excarcelación restrictiva (art. 319 del C.P.P.N.) exige, en cambio, un test completo de riesgo procesal (cfse. autor y obra citados).

En tal sentido, corresponde al Estado la comprobación o verificación de tres aspectos diversos, a saber; 1) el **peso de las pruebas de cargo** conocidas por el imputado, 2) su **personalidad y situación particular** y 3) la **actitud procesal** respecto a la investigación de la verdad. Se entiende además, que a diferencia de la regla principal antes enunciada (arts. 316, 317, inc. 1°, CPPN) la presente pauta (art. 319 del CPPN), que agudiza la privación de la libertad aún dentro del conjunto de ilícitos que admiten la excarcelación, requiere un examen completo de riesgo procesal, esto es, de afectación de los fines del proceso. Por tanto, la interpretación de las indicaciones señaladas

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982

es, en esta hipótesis, particularmente restrictiva (Sandro, ob.cit.).

BECCARIA -de innegable influencia en la ciencia del Derecho penal-, en su obra *De los delitos y de las penas*, indicaba que en la concepción liberal de la potestad estatal de represión, la captura o encarcelamiento previo a la sentencia "...no podía quedar librada al arbitrio de los jueces, sino que era la ley quien en definitiva debía fijar la procedencia..." añadiendo que las cárceles cumplían la función de "simple custodia de un ciudadano hasta que se lo juzgue culpable" y que su rigor "no puede ser más que el necesario para impedir la fuga, o para que no se oculten las pruebas del delito" debiendo durar "el menor tiempo posible" (cfse. BECCARIA, Cesare, op. cit., Ed. Temis, Ayedra Redín, con notas de Calamandrei).

Ya más recientemente y de manera concordante, se ha afirmado que "la pérdida de la libertad como consecuencia de la prisión preventiva sólo es posible cuando resulta esperable una pena de prisión" (HASSEMER, Winfried, *Crítica al derecho penal de hoy*, Ed. Ad-Hoc, Bs.As., 1995, p. 121, Trad. Patricia Ziffer).

Así las cosas y entrando a analizar cómo funcionan los casos previstos tanto en el art. 316 del C.P.P.N. cuanto en el art. 319 del citado código, debe subrayarse que los presupuestos de procedencia contemplados en el artículo primeramente citado (316) no constituyen *per se* una presunción *iure et de iure* sino que, por el contrario, deben ser interpretados, por parte de los juzgadores, como una presunción *iuris tantum*; mientras que la otra disposición (art. 319) configura una verdadera hipótesis de excepción para los casos en los que, objetivamente, resulte procedente la excarcelación o ~~exención de prisión. De tal modo, las disposiciones~~

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B  
FCB 5841/2020/9/CA3

emanadas de los arts. 316 y 317 del C.P.P.N. sólo contienen supuestos de verificación previa a la aplicabilidad de lo normado por el art. 319 del mismo cuerpo normativo.

Es importante aludir, por último, al precepto de la condenación condicional del art. 26 del C.P., del que se colige que toda condena que supere los tres años fijados por la norma antes dicha necesariamente debe ser de cumplimiento efectivo.

Ahora bien, en lo que concierne al tema de la gravedad de la imputación como justificativo de la denegación de la eximición de prisión o, en su caso, de la excarcelación, se estima que, por sí solo, no constituye elemento suficiente para denegar los beneficios enunciados, ya que el juzgador debe examinar el caso en concreto y decidir, en particular, si concurre alguna causal de eventual entorpecimiento del proceso penal o peligro real de fuga por parte del imputado. Según ha señalado la Jurisprudencia más significativa en la materia, lo contrario, esto es, la denegación del beneficio argumentando, únicamente, que la gravedad del hecho enrostrado no autoriza objetivamente la concesión del mismo, equivaldría a incurrir en afirmaciones de contenido meramente dogmático (entre otros, C.N.C.P., Sala III, Registro 488.05.3, "Fernández Alegría, Jorge s/ recurso de casación", 16.06.05, Causa n° 5831).

Si la pena máxima resultante de la calificación legal del hecho asignada por el juez fuera superior a los ocho años de pena privativa de la libertad no corresponde, en principio, la concesión de la exención de prisión y en los casos en que el mínimo legal también supera el máximo de pena que puede ser dejada en suspenso, tampoco corresponde acceder al beneficio de la exención de prisión o excarcelación, salvo que se demuestre, en el caso

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982

puntual, que por la modalidad de la conducta llevada a cabo y/o por las circunstancias especiales del caso no se presentaran las causales ya enunciadas de entorpecimiento de la investigación o fuga del encartado.

A la par de lo anterior, en el artículo 319 del C.P.P.N. se contemplan las pautas que permiten denegar la concesión de la excarcelación o la exención de prisión cuando las singulares circunstancias del caso hicieran presumir que el inculcado podría intentar **eludir la acción de la justicia o entorpecer el curso de las investigaciones.**

Ahora bien, debe tenerse en cuenta, en cuanto el marco normativo que rige la cuestión, que el pasado 13 de noviembre, la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal mediante Resolución 2/2019 dispuso -en lo que aquí interesa- la implementación para todo el territorio nacional de los artículos 210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal, a efectos de evitar situaciones de desigualdad ante la ley entre los justiciables de las zonas en las que se aplica ese Código y los de aquellas zonas en las que aún no se implementó de forma integral.

Conforme lo dispone la Resolución 2/2019 citada (B.O. del 19.11.2019), la implementación de tales normas se hará a partir del tercer día posterior a la fecha de su publicación, por lo que al día de la fecha corresponde su aplicación en esta jurisdicción.

A más de ello, y reiterando que he lo sostenido en pronunciamientos recientes (ver "INCIDENTE DE EXCARCELACION DE SAILLEN JULIO MAURICIO"- FCB 100016/2018/2/CA3- e "INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN DE CATRAMBONE, PASCUAL VICENTE..."- FCB 100016/2018/3/CA4-), ~~conforme lo sostiene autorizada doctrina y jurisprudencia,~~

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B  
FCB 5841/2020/9/CA3

la prisión preventiva es una medida cautelar **de carácter provisional**, que debe ser dejada sin efecto o sustituida por medidas menos gravosas en cuanto desaparezcan las condiciones que dispusieron su dictado.

En dicha oportunidad sostuve que las **Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad** (Reglas de Tokio), adoptadas por la Asamblea General de la ONU el 14.12.1990, establecen en su regla N°6, que en el procedimiento penal *"sólo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso, teniendo debidamente en cuenta la investigación del supuesto delito y la protección de la sociedad y de la víctima."*

Por su parte, el **Informe N° 35/07 de la CIDH de la OEA** (del 1 de mayo de 2007), en el punto 104 indica que *"...el juzgador deberá revisar, periódicamente, si los motivos que originariamente fundaron la prisión preventiva aún subsisten. En tal exposición, se deberán expresar las circunstancias concretas de la causa que permitan presumir, fundadamente, que persiste el peligro de fuga o enunciar las medidas probatorias que resten cumplir y su imposibilidad de producirlas con el imputado en libertad..."* (el resaltado me pertenece).

En el mismo sentido se señala que el principio de provisionalidad *"impone la necesidad de controlar que todos los presupuestos de la prisión preventiva aún subsisten. Desaparecidos sus fundamentos, el encarcelamiento debe cesar."* -punto 108- (el resaltado es propio).

Por último, tal como hice alusión al expedirme en los incidentes citados, el **Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas**, aprobado por la CIDH el ~~30.12.2013~~, ~~recomienda a los Estados miembros de la OEA~~

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982

implementar "mecanismos de supervisión para revisar periódicamente la situación de las personas que se encuentran bajo prisión preventiva, para garantizar que se agilicen los procesos penales y que las personas que no sean juzgadas en un tiempo razonable sean puestas en libertad mientras concluye el proceso. **La responsabilidad de garantizar que estas revisiones se efectúen recaerá en la Fiscalía o en la autoridad judicial competente a cargo del proceso.** Cuando no haya necesidad de mantener esta medida la misma deberá ser levantada inmediatamente." (Apartado VIII, punto 326, inciso C, recomendación N°14 del informe citado, el resaltado pertenece al suscripto).

Ahora bien, en este punto cabe tener presente que el **art. 210 del Código Procesal Penal Federal** dispone: "Medidas de coerción. El representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL o el querellante podrán solicitar al juez, en cualquier estado del proceso y con el fin de asegurar la comparecencia del imputado o evitar el entorpecimiento de la investigación, la imposición, individual o combinada, de: a. La promesa del imputado de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación; b. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, en las condiciones que se le fijen; c. La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe; d. La prohibición de salir sin autorización previa del ámbito territorial que se determine; e. La retención de documentos de viaje; f. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones, de visitar ciertos lugares, de comunicarse o acercarse a determinadas personas, siempre que no se afecte el derecho de defensa; g. El abandono inmediato del domicilio, si se tratara de ~~hechos de violencia doméstica y la víctima conviviera con~~

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B  
FCB 5841/2020/9/CA3

*el imputado; h. La prestación por sí o por un tercero de una caución real o personal adecuada, que podrá ser voluntariamente suplida por la contratación de un seguro de caución, a satisfacción del juez; i. La vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de rastreo o posicionamiento de su ubicación física; j. El arresto en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia o con la que el juez disponga; k. La prisión preventiva, en caso de que las medidas anteriores no fueren suficientes para asegurar los fines indicados..."*

Es decir, la norma del art. 210 del C.P.P.F. enumera las medidas de coerción alternativas a la prisión preventiva, estableciendo su aplicación para los casos en que ciertas medidas menos gravosas no fueren suficientes.

De tal forma, la normativa citada vino a plasmar en el texto legal el criterio que ya la doctrina y jurisprudencia sostenían con anterioridad (al igual que los organismos internacionales), reafirmando que el instituto de la prisión preventiva deberá ser aplicado en última instancia, cuando las restantes medidas pasibles de ser impuestas sean ineficaces para asegurar la comparecencia del imputado o evitar el entorpecimiento de la investigación.

Ahora bien, tal como lo sostuvo el a quo, la conducta evidenciada por Baldovino, de haber brindado voluntariamente un domicilio falso al personal actuante y con ello haber ocasionado un entorpecimiento de la investigación, permite presumir que, estando en libertad, no cumplirá con las obligaciones procesales que se le impongan, y por ende, permite sostener la existencia de un peligro procesal de obstrucción de la investigación (art. 319 del CPPN).

---

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982

Es de destacar que la declaración indagatoria del imputado Baldovino, donde declaro residir en Miradores de Manantiales 2, fue realizada el día 18.08.2021, tan sólo trece días después de que manifestara, al momento del allanamiento de uno de los locales comerciales, residir en Bv. Chacabuco 260.

Por todo lo expuesto, entiendo que el recurso interpuesto en contra del dictado de la prisión preventiva de Marcos Baldovino debe ser rechazado y corresponde confirmar la resolución apelada en cuanto así lo dispuso (conf. arts. conf. arts. 312 y 319 del CPPN y 210, 221 y 222 del CPPF)

**VI.** Por todo lo expuesto, entiendo que corresponde **revocar** parcialmente la resolución dictada por el Juzgado Federal N°1 de Córdoba con fecha 04.02.2022, en cuanto dispuso **el sobreseimiento de Joaquín Rocca y Rosa Marta Micoli** por el delito de lavado de activos (art. 303 del C.P.)-hecho quinto-, debiendo continuarse la investigación a su respecto; y **declarar la nulidad del procesamiento dictado en contra de Mauro Ezequiel Falvo** por el delito de asociación ilícita fiscal (art. 15 inc. c) de la ley 24.769 y ley 27.430)- hecho primero- (conf. art. 123 del CPPN).

Asimismo entiendo que corresponde **confirmar el procesamiento** dictado en contra de **Marcos Baldovino, Germán Rocca, Joaquín Rocca y Rosa Marta Micoli** por el delito de asociación ilícita fiscal (art. 15 inc. c) de la ley 24.769 y ley 27.430)- hecho primero-, los tres primeros en carácter de organizadores; y **confirmar el procesamiento de Marcos Baldovino** por el delito de lavado de activos agravado (art. 303 inc. 1 e inc. 2 apartado "a" del C.P.)- hecho tercero- **y de Germán Rocca** por el delito de lavado de ~~activos (art. 303 del C.P.)- hecho cuarto-~~

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B  
FCB 5841/2020/9/CA3

Finalmente, entiendo que corresponde **confirmar el dictado de la prisión preventiva de Marcos Baldovino**, por las razones expuestas en los considerandos (conf. arts. 312 y 319 del CPPN y 210, 221 y 222 del CPPF). Sin costas (conf. arts. 530 y 531 del CPPN). Así voto.

**La señora Juez de Cámara, doctora Liliana Navarro, dijo:**

**I.** Avocada al estudio de las presentes actuaciones, corresponde decidir si se debe hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos por el Sr. Fiscal Federal N°1 en contra del sobreseimiento dispuesto en favor de Joaquín Rocca y Rosa Micoli por el hecho nominado quinto; el interpuesto por el defensor particular de Mauro Ezequiel Falvo en contra de su procesamiento; y el interpuesto por el letrado defensor de Germán Rocca, Marcos Baldovino, Joaquín Rocca y Rosa Micoli, en contra del procesamiento de los nombrados y, asimismo, en contra del dictado de la prisión preventiva de Baldovino, todos resueltos en el pronunciamiento de fecha 04.02.2022 del Juzgado Federal N°1.

**II.** Como primera cuestión, quiero señalar que adhiero a las conclusiones y fundamentos dados por el señor magistrado preopinante en cuanto a los recursos interpuestos por el Sr. Fiscal Federal N°1; el interpuesto en favor de Marcos Ezequiel Falvo; y el recurso interpuesto en contra del procesamiento de Germán y Joaquín Roca, Marcos Baldovino y Rosa Micoli, y me expido en idéntico sentido.

**III.** Por otra parte, en cuanto a la prisión preventiva de Marcos Baldovino, sin perjuicio de que a mi criterio correspondería revocarla, atento ya haberse dispuesto su procesamiento, haberse receptado las declaraciones testimoniales pertinentes y haber quedado ~~descartado el riesgo de fuga en base~~ a la presentación

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982

voluntaria del imputado al momento de ordenarse su detención, el planteo formulado ha devenido abstracto en razón de haberse dispuesto su libertad por orden del Juzgado Federal N°1 el día 5 de agosto del corriente año, conforme surge de las constancias del "Incidente de Excarcelación de Baldovino Marcos..." (Expte. 5841/2020/11) que obran en el sistema Lex 100.

**IV.** Por lo expuesto, no corresponde expedirse en cuanto al recurso en contra de la prisión preventiva de Marcos Javier Baldovino, en razón de haber devenido en abstracto el planteo formulado. Así voto.

**El señor Juez de Cámara, doctor Ignacio María Vélez Funes, dijo:**

Llegados los autos a estudio del suscripto, corresponde expedirme acerca de los recursos de apelación interpuestos por el Sr. Fiscal Federal N°1 y por los doctores Facundo Amoedo -en favor de Marcos E. Falvo- y Osvaldo Baccino -en su carácter de defensor de Germán y Joaquín Rocca, Marcos Baldovino y Rosa Micoli- en contra de la resolución dictada por el Juzgado Federal N°1 de Córdoba con fecha 4 de febrero de 2022.

**I.** Corresponde señalar, en primer término, que comparto las conclusiones y fundamentos dados por el señor Juez de Cámara del primer voto, Dr. Abel G. Sánchez Torres, en cuanto entiende que corresponde revocar el sobreseimiento de **Joaquín Rocca y Rosa Micoli** por el hecho quinto en orden al delito de lavado de activos, debiendo continuar con la investigación; declarar la nulidad parcial de la resolución apelada en cuanto dispuso el procesamiento de **Mauro Ezequiel Falvo** en relación al delito de asociación ilícita fiscal, por el hecho primero, por falta de fundamentación, art. 123 del CPPN; confirmar el ~~procesamiento de Marcos Baldovino, Germán Rocca, Joaquín~~

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B  
FCB 5841/2020/9/CA3

**Rocca y Rosa Micoli** por el hecho primero por el delito de asociación ilícita fiscal en calidad de organizadores y en cuanto dispuso confirmar el procesamiento de **Marcos Baldovino y Germán Rocca** por el hecho tercero y cuarto, respectivamente, por el delito de lavado de activos.

**II.** Como segunda cuestión, en cuanto al dictado de la **prisión preventiva** en contra de **Marcos Baldovino**, comparto lo manifestado por la señora Juez de Cámara, Liliana Navarro, atento lo informado por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba en el Oficio Electrónico de fecha 8.9.2022 con motivo de la medida previa para mejor proveer solicitada por el suscripto (agregado a fs. 106), la cuestión sobre la libertad ambulatoria **ha devenido en abstracta** ahora en esta Alzada, toda vez que el mismo Juez Federal actuante le ha concedido la excarcelación a **Marcos Baldovino (DNI 27.893.378)** desde el pasado **4 agosto de 2022**, según resolución protocolizada mediante Clave FCB005841/2020/11, por lo que no corresponde expedirse al respecto. Así voto.

Por lo expuesto;

### **SE RESUELVE:**

#### **Por mayoría**

**I. DECLARAR MATERIA ABSTRACTA** el planteo invocado respecto del dictado de la **prisión preventiva de Marcos Baldovino (D.N.I. 27.893.378)**, en razón de haberse dispuesto su libertad por orden del Juzgado Federal N°1 de Córdoba el día 5 de agosto del corriente año, según resolución protocolizada mediante Clave FCB005841/2020/11.

#### **Por unanimidad**

**I. REVOCAR** parcialmente la resolución dictada por el Juzgado Federal N°1 de Córdoba con fecha 04.02.2022, en cuanto dispuso **el sobreseimiento de Joaquín Rocca y Rosa Marta Micoli** por el delito de lavado de activos (art. 303

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982

del C.P.) -hecho quinto-, debiendo continuarse la investigación a su respecto.

**II. DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL** de la resolución dictada por el Juzgado Federal N°1 de Córdoba con fecha 04.02.2022 en cuanto dispuso **el procesamiento de Mauro Ezequiel Falvo** por el delito de asociación ilícita fiscal (art. 15 inc. c) de la ley 24.769 y ley 27.430)- hecho primero- (conf. art. 123 del CPPN).

**III. CONFIRMAR el procesamiento de Marcos Baldovino, Germán Rocca, Joaquín Rocca y Rosa Marta Micoli** por el delito de asociación ilícita fiscal (art. 15 inc. c) de la ley 24.769 y ley 27.430)- hecho primero-, los tres primeros en carácter de organizadores (conf. art. 306 del CPPN)

**IV. CONFIRMAR el procesamiento de Marcos Baldovino** por el delito de lavado de activos agravado (art. 303 inc. 1 e inc. 2 apartado "a" del C.P.)- hecho tercero- (conf. art. 306 del CPPN)

**V. CONFIRMAR el procesamiento de Germán Rocca** por el delito de lavado de activos (art. 303 del C.P.)- hecho cuarto- (conf. art. 306 del CPPN).

**VI. Sin costas** (arts. 530 y 531 del CPPN).

**VII. Regístrese y hágase saber. Cumplido, publíquese y bajen.**

ABEL G. SÁNCHEZ TORRES  
JUEZ DE CÁMARA  
En disidencia parcial

LILIANA NAVARRO  
JUEZ DE CÁMARA

IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES  
JUEZ DE CÁMARA

CELINA LAJE

Secretaria de Cámara

Fecha de firma: 19/09/2022

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36206803#333082861#20220919130100982





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B  
FCB 5841/2020/9/CA3

---

*Fecha de firma: 19/09/2022*

*Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA*

*Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA*

*Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara*



#36206803#333082861#20220919130100982